

PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO

**UNA SALIDA
HACIA EL URUGUAY
DEL FUTURO**

UNA SALIDA HACIA EL URUGUAY DEL FUTURO

I

El Gobierno contra el Pueblo. — El 2 de mayo de este año, el Presidente Pacheco Areco constituye el cuarto gabinete del período de gobierno colorado, primero designado después de su acceso a la primera magistratura. La crisis económica, social y política que sufre el país se había agravado notoriamente en esos días. El ministro Acosta y Lara acababa de ser censurado por estafador; el peso uruguayo —infidencia mediante— había sido devaluado una vez más dos días antes, de \$ 200 a \$ 250; el costo de la vida aumentaba vertiginosamente. Los cargos ministeriales abandonados por dirigentes políticos del Partido Colorado pasaron a manos de integrantes de grupos económicos extremadamente poderosos: el banquero Peirano Facio, el latifundista Frick Davie, Venancio Flores (ligado al grupo Ferrés), los grandes contratistas, Serrato y Pintos Riso. Frente al deterioro de la situación, la oligarquía decidió asumir directamente el gobierno. Frente a la protesta popular, Pacheco Areco resolvió apoyarse en los privilegiados.

Los nuevos ministros cayeron en los mismos vicios que los “politiqueros”. El Poder Ejecutivo continuó improvisando sobre las materias más importantes, carente del menor esbozo de programa. Las causas profundas de los problemas que vive la nación siguieron desarrollándose mientras el gobierno, completamente desorientado, atendía sus consecuencias secundarias. Pero las escasas iniciativas adoptadas revelaron muy pronto hacia qué rumbo apuntaba. Se pretendía descargar sobre el pueblo el peso de la crisis.

El Gobierno Represor. — El 13 de junio el Ejecu-

tivo corta repentinamente el diálogo con los trabajadores, implantando el régimen de medidas prontas de seguridad. Utilizando como pretexto las manifestaciones estudiantiles, se sometió al país a una dictadura disfrazada, en la que los derechos individuales están a merced del capricho del Ministro del Interior y los jefes policiales. Se reprime con dureza cada vez mayor a los obreros, a los estudiantes, al pueblo en general. Con esto se busca atemorizar a la opinión pública a fin de que ésta no resista a las pésimas condiciones de vida impuestas, no exija soluciones, no denuncie los privilegios y la corrupción. Los uruguayos soportamos hoy un verdadero régimen policial, en el que incluso la prensa, radio y televisión deben informar del modo que prefieran Jiménez de Aréchaga y los Jefes de Policía.

El Gobierno Congelador. — ¿Cuál fue el motivo real que determinó el establecimiento de las medidas prontas de seguridad? A los quince días de su implantación, el 28 de junio, se conoció, fuera de toda duda. En esta fecha Pacheco Areco y Peirano Facio firmaron un decreto por el que se congelaron los salarios de todos los trabajadores del país, junto, según se dijo, con los precios de casi todos los artículos y servicios. Durante los días siguientes, Subsistencias montó un “show” a nivel nacional, cerrando comercios infractores del decreto; esta severidad duró, sin embargo, lo que dura un lirio: a los quince días ya no se sancionaba a ningún comerciante. Inmediatamente comenzaron, en cambio, los llamados “ajustes” en las listas de precio y se especificó que los alquileres no estaban comprendidos en la congelación decretada. A esta altura ya resulta claro que lo único que quedará congelado serán los salarios.

Esta medida responde a exigencias del Fondo Monetario Internacional, organismo que custodia los intereses del capitalismo mundial. En una carta de intención firmada en el mes de febrero, el gobierno uruguayo se comprometió a adoptarla. Ya el ex ministro Acosta y

Lara había hecho un esfuerzo por congelar los salarios a principios de año, esfuerzo que chocó contra una unánime repulsa. Seis meses después, habiendo aumentado el costo de la vida en un 40 %, cuando estaban a punto de aplicarse en muchos gremios los reajustes semestrales, se aprueba el decreto mencionado, al amparo de las Medidas Prontas de Seguridad. Sólo en estas condiciones se pudo cometer lo que significa un despojo a la inmensa mayoría de la población. El gabinete de los banqueros, latifundistas, grandes comerciantes y grandes industriales ponía de manifiesto a qué se reduce toda su política económica.

El Gobierno Atropella la Constitución. — Solamente violando las normas básicas de la nación podía llevarse adelante este programa antipopular y este desborde de fuerza. El Poder Ejecutivo se ha burlado y se burla de la Constitución. Todos los catedráticos y especialistas en derecho constitucional coinciden en calificar de absolutamente contrarias a aquélla la militarización de funcionarios públicos, la intervención del Banco de la República, Banco Hipotecario, UTE, AFE y ANCAP, la congelación de salarios por decreto, el allanamiento de la Universidad y la censura a los órganos de prensa.

Una Oposición Creciente. — Nuestro pueblo no toleraría impasible la transformación de nuestra democracia en un régimen de mandones y prepotentes. Las libertades uruguayas fueron logradas por las masas y no por la oligarquía, por los trabajadores y no por los explotadores. Se trata de una historia larga y llena de sacrificios. Fue el pueblo quien siguió a Artigas y los jefes de la Patria Vieja; quien apoyó a las figuras más limpias de los partidos tradicionales, cuando éstos constituían fuerzas de progreso y justicia; quien formó el movimiento sindical que, poco a poco, arrancó a las patronales los derechos del trabajo. Es el pueblo quien siente, por lo tanto, como suyas esas libertades; hoy como siempre, la minoría de privilegiados se mueve según sus intereses económicos,

dispuesta a entregar el país y destruir la democracia para salvar sus bancos, estancias, fábricas y comercios.

La oposición al gobierno de Pacheco Areco se viene ampliando continuamente. No es ya la contienda entre blancos y colorados. Una clase social y no un partido político está en el Poder y en la oposición, por consiguiente, se hallan las demás clases a las que se pretende someter. Respaldan al gobierno sectores blancos y colorados, mientras otras fracciones de ambos partidos se le enfrentan vigorosamente. Estas últimas coinciden así con los partidos no tradicionales, con los sindicatos, con la Universidad, etc. Une a todos el afán de defender los derechos populares, el nivel de vida de la población y la independencia del Uruguay.

Se mantiene, de tal modo, una lucha equilibrada, al menos hasta el presente. Por un lado, Pacheco y sus ministros, las corrientes más retrógradas del Partido Nacional y Partido Colorado, las organizaciones y medios de difusión de la clase explotadora, la Policía utilizada como medio de represión. Por otro, el movimiento sindical, los sectores con mayor arraigo popular en los partidos tradicionales, los partidos no tradicionales, la ciudadanía independiente, la Universidad, etc. En el campo de la oposición existen, desde luego, discrepancias muy profundas: el punto de convergencia se encuentra simplemente en la necesidad de detener las intenciones gubernamentales para establecer una dictadura. Se han obtenido, en ese aspecto, éxitos considerables. A pesar de que las bancadas oficialistas se esfuerzan por paralizar al Parlamento, a fin de que el Ejecutivo actúe sin control, algunas de las iniciativas más groseramente reaccionarias que éste pretendiera convertir en leyes han sido rechazadas o discretamente archivadas. Es el caso de la congelación de salarios, la reglamentación sindical, la destitución de las autoridades universitarias, la militarización de funcionarios públicos, etc.

Urgencia de un Programa Popular. — A medi-

da que transcurre el tiempo se advierte, no obstante, una falla importante en el vasto movimiento opositor. Carece de un programa en el cual se pueda basar una política que por vías muy distintas de aquéllas que transita el oficialismo conduzca a la recuperación del país. Si bien es cierto que el Gobierno no desarrolla una política que merezca el nombre de tal sino sólo iniciativas aisladas, a menudo contradictorias entre sí, también es indiscutible que la crisis nacional exige planificar a mediano y largo plazo. Los grupos opositores no han respondido aún a esta necesidad y, en tal sentido, no conforman todavía la alternativa progresista que la ciudadanía espera para oponer a la acción de la oligarquía en el poder.

Parece claro que el programa común que la oposición debe conseguir —y la unidad que el programa hará posible— no se podrá elaborar si no es por encima de los límites partidarios conocidos. A los explotadores unidos tiene que responder el pueblo unido. El pueblo blanco, colorado, fidelista, democristiano, independiente; el pueblo de los sindicatos, del campo, de la Universidad. No se trata de abolir los partidos existentes para fundar uno nuevo, único; se trata de que las distintas tendencias, conservando su identidad, sepan unificar su acción en la defensa de objetivos que comparten entre todas y que la propia supervivencia del Uruguay reclama.

La Patria en Peligro. — No exageramos al hablar de supervivencia del Uruguay. El deterioro de nuestra economía y los conflictos sociales que de él se generan, junto con la corrupción de quienes tienen el poder económico y político, han llevado a la nación a una encrucijada y en estos momentos de incertidumbre hay muchos que se preguntan si el país puede superar solo sus dificultades y desarrollarse independientemente de estados extranjeros. Otros han optado ya por el pesimismo: los que abandonan el país y se marchan al extranjero. Hay incluso quienes, con mentalidad egoísta, invierten en otras naciones el dinero que ganan en el Uruguay.

Se hace preciso, por lo tanto, que quienes confían en el porvenir de la nacionalidad fundada por Artigas reafirmen su convicción y den testimonio de ella. También este aspecto ofrece un punto de convergencia para las fuerzas sanas y dinámicas.

II

HACIA EL CAMBIO

Las propuestas del 23 de junio. — En esta fecha, el Partido Demócrata Cristiano difundió un mensaje en el que se analizaba a fondo la crisis nacional y se sugerían concretamente vías de solución. Diez días antes se habían implantado las medidas prontas de seguridad; se comenzaba a ejecutar la represión que poco después ocasionaría tres muertos y gran número de heridos graves; el Parlamento rehuía —como ha rehuído hasta el presente— sus responsabilidades, dejaba hacer al Ejecutivo, sin pronunciarse a favor ni en contra de las medidas mencionadas. La confusión era enorme, tanto a nivel popular como a nivel de los dirigentes políticos. Existía —como existe actualmente, porque la coyuntura no se ha alterado, en lo sustancial— conciencia clara de que todo un régimen se había desmoronado. Hechos posteriores crearon en los uruguayos la convicción de que los derechos y las garantías, tan arraigados en nosotros, se hundían irremisiblemente en un pasado más feliz — que, por lo tanto, era preciso rescatarlos, **reconstruirlos**. Pero, ¿cómo?

Algunos grupos pensaban en la “desescalada”: por medio de concesiones mutuas de parte del gobierno, los sindicatos y el movimiento estudiantil podría volverse a la situación anterior al establecimiento de las medidas de seguridad. Otros manejaban la posibilidad de sustituir a Pacheco Areco por Abdala en la Presidencia de la República, presionando la renuncia del primero, en la espe-

ranza de que el segundo orientaría su gestión en el sentido de las aspiraciones populares y admitiendo el diálogo con el movimiento obrero y los estudiantes. Otros creían conveniente responder con la violencia a la violencia del gobierno. Una a una, estas salidas se demostraron ineficaces mientras el Ejecutivo, copado por la oligarquía, congelaba salarios, detenía por centenares a dirigentes sindicales, invadía la Universidad, utilizaba armas de fuego contra manifestantes, acusaba de "subversivas" a las autoridades eclesiásticas, amenazaba al Parlamento para evitar la censura de un ministro, dejaba de un día para otro caprichosamente sin trabajo a miles de obreros y empleados del Frigorífico Nacional, rechazaba la mediación ofrecida por destacados jueces, profesores, religiosos, sometía a la prensa y la radio a censura previa, militarizaba a funcionarios públicos y destituía a directores de entes autónomos, desconocía la Constitución, etc., etc.

El PDC propuso, en cambio, soluciones realistas y que apuntaban a una verdadera superación de las causas que condujeron a la situación dramática en que nos encontramos. Ni "desescaladas" imposibles, ni sustitución de personas en la Presidencia, alternativas éstas que olvidan el origen profundo de la crisis, ni tampoco una apelación a la violencia que deja de lado a las mayorías populares, que en nuestro país deben ser protagonistas del acontecer político. Nuestro Partido:

—llamó a los núcleos opositores de raíz popular a la coordinación de esfuerzos para constituir una alternativa frente a la oligarquía entronizada en el poder;

—sostuvo la necesidad de consultar al pueblo como único camino para alcanzar una definición de los conflictos planteados.

Unidad contra el Gobierno Antipópular. —
Mientras Pacheco, sus ministros y las clases que está de-

trás de ellos saben bien qué es lo que quieren, la oposición parece desconcertada. Los primeros congelan salarios, endeudan al país, devalúan y especulan: son todos arbitrios para descargar la crisis sobre las clases trabajadoras, sin tocar los privilegios, rentas y dividendos de los dueños de las grandes empresas, de los banqueros y de los latifundistas. Los batllistas que advierten cómo hombres que se afilian a esa corriente disipan las conquistas sociales que Batlle, Arena, Brum, Grauert, Luis Batlle implantaron; los nacionalistas auténticos que se inspiran en Herrera, Carnelli, Fernández Crespo, Barrios Amorín; los militantes de izquierda, responsables de su gloriosa tradición de luchas populares y sindicales, marcada con sacrificio y sangre; los cristianos impulsados a la acción social y política por la Iglesia postconciliar, todos ellos han expresado su voluntad de detener el deslizamiento hacia la dictadura de los millonarios, pero lo han hecho separadamente y en ámbitos distintos: unos en el Parlamento, otros en la calle, otros en la prensa, otros en los sindicatos, la Universidad, los liceos; en la Capital y el Interior. De tal modo que la protesta ha quedado en eso solamente, en protesta; el pueblo espera algo más, una fuerza amplia y representativa, con un programa explícito para optar por ella rechazando la orientación gubernamental.

Son numerosos los puntos en los que diversas tendencias opositoras coinciden. Entre otros:

- la adopción de medidas destinadas a frenar la inflación sin asfixiar la economía (aumento de la producción, disminución de los déficits presupuestales, incremento de las exportaciones, regulación de la importación de acuerdo a las necesidades del país, utilización racional del crédito en la obtención de objetivos determinados, estímulo a los productores más eficaces, etc.);
- la adecuación de los salarios al costo de la vida;
- la reforma de la previsión social, que impida una

inminente bancarrota que sumiría en la miseria a cientos de miles de pasivos;

- la reestructuración de la banca para poner al servicio de la nación los recursos financieros que se mueven a través de ella y evitar la especulación que favorece a pocos y perjudica a casi todos;
- la reforma agraria que permita a los que trabajan la tierra poseerla en propiedad, que impida la explotación de los pequeños productores por parte de los grandes, que asegure precios remuneradores a la actividad agropecuaria, que incremente la inversión y la utilización de técnicas avanzadas en el agro, etc.
- la organización de una Administración Pública eficiente, económica, moral;
- la apertura de horizontes a la juventud, en el estudio, la investigación y la vida económica, de forma tal que se detenga el creciente éxodo de técnicos y trabajadose que buscan en el exterior su realización personal y los medios de mantener a su familia.

Estas coincidencias pueden servir de base a una eventual plataforma de gobierno; una política que se ajustara a tales directrices sacaría al país del empantanamiento en que ha caído y del cual la oligarquía no quiere ni puede salvarlo. Con una perspectiva así, el Partido Demócrata Cristiano llamó el 23 de junio a los núcleos de la oposición progresista a una deliberación en común, a un examen conjunto de la situación y las soluciones viables en un futuro inmediato. Anunció que iniciaría una serie de contactos para exponer sus sugerencias y recibir otras; señaló que avanzaba sus propuestas sin rigidez, como un modo de estimular un debate constructivo del que pudiera surgir la fórmula política que aglutinara la reacción popular contra la regresión y la represión.

La coordinación de los esfuerzos opositores, precisó en la referida oportunidad el PDC, se lograría gradualmente; a una experiencia exitosa seguiría otra de mayor alcance; en el curso de la acción se corregirían deficiencias y se elaborarían nuevas bases de entendimiento. El Parlamento podría servir para dar los primeros pasos; luego vendrían los mitines conjuntos, la difusión de documentos, las giras por todo el territorio nacional; finalmente, se llegaría, de ser posible, a la formación de un frente electoral con un programa único.

Que decida el Pueblo. — La segunda proposición que el PDC hizo pública en el Mensaje citado consistía en apelar a la consulta ciudadana como medio de dirimir el enfrentamiento planteado: gobierno contra fuerzas populares.

La coyuntura política uruguaya se asemeja a una guerra de trincheras. Los contendores han ganado posiciones estratégicas y desde allí hacen fuego sobre el adversario. La clase de los privilegiados tiene el Ejecutivo, la policía y sus propios centros tradicionales de poder (Asociación y Federación Rural, Cámaras de Industria y Comercio, Asociación de Bancos, casi toda la prensa, la radio y la televisión, etc.). Cuenta como aliados, además, a Onganía, Costa e Silva y el Fondo Monetario Internacional. Aglutinan los intereses del pueblo la Convención Nacional de Trabajadores, los estudiantes secundarios y universitarios, el Movimiento de Defensa de las Libertades y la Soberanía; las masas participan también por medio de movilizaciones espontáneas, como las que en todo el país se produjeron con motivo de la muerte del estudiante Líber Arce (300.000 personas en el cortejo fúnebre en Montevideo, homenajes en las ciudades del Interior) o la manifestación de mujeres del 27 de setiembre que culminó con un acto de desagravio a Artigas frente a su monumento en la Plaza Independencia.

Como toda guerra de trincheras, esta lucha política

que se desarrolla en el Uruguay supone un equilibrio de fuerzas; ninguna de las dos partes conseguirá a corto plazo una victoria decisiva y la brega podrá, por lo tanto, prolongarse indefinidamente. Pero mientras tanto, la nación misma se desintegra aceleradamente, por lo cual se hace imperioso hallar lo antes posible remedio a la parálisis. El remedio que posibilite la reactivación de las energías sociales, marque el comienzo del vigoroso esfuerzo del país en la búsqueda de su futuro, garantice una conducción firme y lúcida. El trámite para encontrarlo debe incluir el pronunciamiento de la ciudadanía en su totalidad. Hay que llamar a ésta a elegir entre la tesitura gubernamental y una alternativa progresista, encarnada una y otra en grupos y candidatos; hay que reconstituir los equipos de gobierno a través de elecciones parlamentarias generales, como está previsto en la Constitución.

Con ello, en primer término, se pondrá fin a la índole casi ilegítima del actual gobierno, constituido al margen de las opciones de la ciudadanía. En noviembre de 1966 se votó —mayoritariamente— a un hombre, Gestido, un lema, Partido Colorado Batllismo y una orientación de algún modo renovadora. Hoy en día ejercen el poder un Presidente sin prestigio, ministros de la oligarquía que poco o nada tienen que ver con el batllismo y que, entre todos, no juntarían veinte mil votos si se presentaran como candidatos; se mantiene una política retrógrada que no osaría tampoco someterse a plebiscito porque sufriría un rechazo definitivo.

Pero podría, además, formularse la consulta popular en términos reales, eliminando los factores de distorsión de la voluntad del elector que vienen jugando desde tanto tiempo atrás. Por encima de los lemas que cubren las sustanciales discrepancias entre los sectores que acumulan sus sufragios, el pueblo debería elegir sobre la base de las plataformas que las distintas tendencias presentarían y, de tal manera, los progresistas votarían con los progresistas y los reaccionarios con los reaccionarios. El fren-

te opositor adquiriría, en una instancia electoral con dichas características, su sentido más fecundo.

Resulta quizás innecesario pero conveniente reiterar que el PDC promueve una salida a la crisis política perfectamente ajustada a las normas constitucionales. Prevén éstas, en los artículos 147 y siguientes los mecanismos para la disolución de las Cámaras y la convocatoria a elecciones extraordinarias.

Una Favorable Acogida. — Desde el 23 de junio, el Partido Demócrata Cristiano ha tomado contactos con numerosos dirigentes políticos y sindicales, con autoridades universitarias y con personalidades destacadas en otro tipo de actividades, a fin de exponer la visión de la situación nacional y las sugerencias que constan en el presente documento. Las reacciones fueron, casi unánimemente, alentadoras: los entrevistados apreciaron la seriedad y fundamento de nuestra posición. Igual cosa puede decirse de la opinión pública, en la medida en que los escasos recursos al alcance del PDC nos permitieron difundir adecuadamente el Mensaje.

Hechos posteriores al 23 de junio han venido a reafirmar lo expresado entonces y a disipar algún escepticismo o reticencia con que chocó la iniciativa. De allí que hayamos creído necesario reiterar ahora el llamado a la unidad; aspirando esta vez a agrupar vastos sectores populares en respaldo de lo que nos parece la única solución verdadera para los problemas que sufre la nación, que no desaparecerán sino cuando surja un nuevo Uruguay.

1968
Editado por la
Junta Nacional del Partido Demócrata Cristiano
Plaza Libertad 1371
Montevideo